



La portavoz del del PP, Ana Vázquez, y la senadora Elena Castillo, exigen responsabilidades a Sánchez por el auge de la criminalidad en Cantabria.

El PSOE deja Cantabria en mínimos de seguridad: solo ocho cuarteles están abiertos todo el día

El Gobierno central reduce la seguridad en Cantabria, con el cierre de cuarteles, el aumento de delitos en un 52% y más okupaciones, a lo que se suma la falta de efectivos de la Guardia Civil

AFG / SANTANDER

El Partido Popular ha incrementado su presión política contra el Gobierno central tras denunciar una situación de deterioro en la seguridad pública de Cantabria. Según el Grupo Popular en el Congreso, liderado en esta materia por su portavoz de Interior, Ana Vázquez, el desmantelamiento progresivo de infraestructuras de la Guardia Civil y la reducción de efectivos disponibles estarían generando un vacío de atención y vigilancia especialmente grave en las zonas rurales. Durante una rueda de prensa, Ana Vázquez afirmó que su formación exigirá la comparecencia urgente del Secretario de Estado de Seguridad y de la directora de la Guardia Civil. Esta solicitud se produce tras conocerse la eliminación de seis unidades del SEPRONA en Cantabria, lo que el PP interpreta como una muestra más del debilitamiento de los servicios de seguridad en la región.

Uno de los principales datos que sustenta esta denuncia es el hecho de que, de los 42 cuarteles de la Guardia Civil existentes en la comunidad autónoma, solo ocho están operativos las 24 horas del día. Según Vázquez, esto



Encuentro con los sindicatos de Guardias Civiles y Policía Nacional. /ALERTA



Los diputados con representantes de los funcionarios de prisiones. /ALERTA

dificulta gravemente el acceso de los ciudadanos a un servicio básico de seguridad. «Los vecinos llegan a los cuarteles y encuen-

Las okupaciones ilegales en la región han crecido un 183% en diez años

tran carteles que limitan el horario de atención. ¿Qué clase de servicio público es ese?», planteó en su intervención.

Además, la portavoz popular subrayó que Cantabria registra actualmente el índice más elevado de absentismo laboral entre los agentes de la Guardia Civil en todo el país. Este fenómeno, sumado a la carencia de refuerzos estructurales -ya que solo se han incorporado cinco guardias civiles más desde 2018-, hace aún más difícil mantener una cobertura adecuada en la región.

UN AUMENTO DEL 52% DE LA CRIMINALIDAD. En cuanto a la evolución de la delincuencia, el diputado cántabro Félix de las Cuevas señaló que los delitos

han aumentado un 52% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio del Interior, Cantabria ha pasado de registrar 4.028 delitos en 2015 a superar los 6.140 en

Los delitos en la región han aumentado un 52% desde 2015, según el PP

Cantabria sufre el mayor índice de absentismo de guardias civiles de toda España

la actualidad. El diputado también criticó la falta de reacción de la Delegación del Gobierno en la comunidad, a la que acusó de «mirar hacia otro lado» ante esta realidad.

Por su parte, la senadora Elena Castillo llamó la atención sobre el incremento significativo de las okupaciones ilegales en la comunidad autónoma. Según datos ofrecidos por la propia senadora, este tipo de ocupaciones ha crecido un 183% en los últimos diez años en Cantabria. Castillo vinculó esta situación con la existencia de más de 50.000 viviendas vacías, muchas de las cuales no se ponen en alquiler por temor a ser ocupadas. La senadora recordó que la primera norma impulsada por el Partido Popular en el Senado tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo fue precisamente una Ley Antiokupación.

A juicio del PP, este deterioro de la seguridad vulnera el principio constitucional de igualdad entre los ciudadanos. Ana Vázquez lo expresó afirmando que «no hay igualdad entre un ciudadano de un núcleo urbano con comisaría y otro de una zona rural sin cuartel». Vázquez también criticó el hecho de que muchas víctimas de delitos se vean obligadas a recorrer largas distancias para interponer una denuncia, afirmando que «a veces cuesta más el taxi que lleva a la víctima a comisaría que lo que le han robado».

Por último, la diputada popular abordó el tema del personal penitenciario. Indicó que podría producirse un acuerdo con el Partido Socialista para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Esta medida, de concretarse, afectaría a 220 funcionarios y 28 trabajadores laborales del centro penitenciario El Dueso y del Centro de Inserción Social de Candina, ambos ubicados en Cantabria. «Es hora de que el Estado les reconozca como lo que son: servidores públicos en primera línea», concluyó.